

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310501020180004401  
Proceso: Ordinario  
Demandante: LUZ BETY LOVERA BARRIOS  
Demandado: PORVENIR S.A. y COLPENSIONES  
M. P. MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM  
Fecha de fallo: 19 de agosto de 2022  
Decisión: Confirma, modifica y adiciona. mp

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 22 de agosto de 2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	LUZ BETY LOVERA BARRIOS
DEMANDADAS	COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
ORIGEN	Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-010-2018-00044-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art.13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUZ BETY LOVERA BARRIOS contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- y PORVENIR S.A.

En atención al memorial aportado el 17 de julio de 2022 y a la escritura pública N°3374 del 2 de septiembre de 2019 de la Notaría Novena del Círculo de Bogotá, se reconoce personería para representar los intereses de Colpensiones, como apoderada principal a la sociedad Muñoz y Escrucería S.A.S. identificada con NIT.900.437.941-7. Así mismo se reconoce personería para representar a dicha entidad como apoderada sustituta al abogado Aura Dimelsa Ospina Vidal, identificado con la CC 1.014.190.408 y portador de la TP 312.786 del C. S de la J.<sup>1</sup> En virtud de lo anterior se entienden revocados los poderes y sustituciones anteriores que haya otorgado la entidad.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda<sup>2</sup>

La señora Luz Bety Lovera Barrios formula demanda contra Colpensiones y Porvenir S.A, pretendiendo **i)** se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Porvenir S.A, por haber incumplido esta AFP con el deber de información. Como consecuencia de lo anterior, **ii)** que se condene a Porvenir S.A a trasladar a Colpensiones los aportes cotizados al RAIS, **iii)** y se condene a Colpensiones a aceptar dichos aportes y a tenerla como afiliada sin solución de

<sup>1</sup> 02Segundainstancia; 04MemorialAlegatos.pdf

<sup>2</sup> 01PrimeraInstancia; 03. Expediente ordinario laboral 05001310501020180004401.pdf, págs. 2 a 6.

continuidad desde el día 2 de febrero de 1983. **iv)** Costas y agencias en derecho a cargo de las demandadas.

Fundamentó sus pretensiones en que se afilió al extinto Instituto de Seguros Sociales - ISS- el 2 de febrero de 1983 y posteriormente se trasladó a la AFP Porvenir S.A el día 10 de agosto de 1999. Respecto a este traslado de régimen pensional, refiere que suscribió el formulario de afiliación con destino a Porvenir S.A luego de que un asesor de dicho fondo le manifestara que el ISS se iba a acabar, por ello, no podría acceder a una pensión, mientras que en Porvenir S.A se podría pensionar a cualquier edad. No se le realizó una proyección de su mesada pensional, ni se le informó acerca de las potenciales desventajas que implicaría su traslado al RAIS. Tampoco recibió una reasesoría pensional cuando se encontraba próxima a cumplir 47 años de edad.

El 12 de julio de 2017 solicitó a Porvenir S.A invalidar su afiliación, Sin embargo, el 28 de julio de 2017 la AFP del RAIS negó su petición aduciendo que no contaba los elementos de juicio suficientes para dejar sin efectos su afiliación. El 18 de julio de 2017 radicó un formulario de traslado ante Colpensiones, pero le fue negado en la misma fecha por la administradora del RPM por encontrarse a menos de diez años de cumplir la edad de pensión.

### **Oposición a las pretensiones de la demanda**

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

#### **i) Colpensiones<sup>3</sup>**

La demandante al suscribir el formulario de vinculación al RAIS hizo uso de su derecho a la libre escogencia de régimen, consagrado en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, sin que hubiera ejercido el derecho de retracto dentro del término previsto para ello, motivo por el cual no es de recibo que después de más de diez años del traslado aduzca un vicio en su consentimiento con el fin de atacar la eficacia o nulidad de dicho acto jurídico de traslado de régimen. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de acceder a las pretensiones de la demandante, los dineros que sean trasladados por el fondo privado hacia Colpensiones deberán ser debidamente indexados y devolverse además lo descontado por cuotas de administración.

Excepcionó: Inexistencia de la obligación de aceptar el traslado de la demandante a Colpensiones, imposibilidad jurídica de cumplir con las obligaciones pretendidas, buena fe de Colpensiones, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas.

#### **ii) Porvenir S.A<sup>4</sup>**

No existen razones fácticas o jurídicas que conduzcan a declarar la ineficacia del traslado de régimen, pues la decisión de la demandante fue consciente y espontánea, sin presiones de ninguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos por las normas vigentes para

---

<sup>3</sup> 01PrimeraInstancia; 03. Expediente ordinario laboral 05001310501020180004401.pdf, págs 72 a 78.

<sup>4</sup> 01PrimeraInstancia; 03. Expediente ordinario laboral 05001310501020180004401.pdf, págs 137 a 160.

la fecha en que se produjo el traslado, recibiendo previamente información suficiente sobre las implicaciones de su decisión y acerca de las características del RAIS, quien además contaba con plena capacidad para dar su consentimiento en el acto jurídico. Así mismo, la afiliada como consumidora financiera tenía el deber de informarse sobre las implicaciones que tendría dicho traslado, igualmente pudo hacer uso de su opción de retracto o trasladarse en varias oportunidades y no lo hizo.

De otro lado, no hay norma legal que establezca la ineficacia del traslado de régimen por ausencia de información completa al afiliado, ya que el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 no lo consagra expresamente, pues prevé una situación de carácter sancionatorio. Por último, tanto la acción de nulidad como de ineficacia de traslado se encuentran prescritas, pues no todas las cuestiones relacionadas con un derecho pensional tienen relación directa con la consolidación del mismo.

Excepcionó: prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, buena fe.

### **Sentencia de primera instancia<sup>5</sup>**

El 16 de junio de 2021, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia de la afiliación de la señora Luz Bety Lovera Barrios al RAIS administrado por Porvenir S.A. a la cual se condenó trasladar con destino a Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la totalidad de las cotizaciones realizadas por la demandante, sin descontar gastos de administración, garantía de pensión mínima y comisiones, junto con los rendimientos financieros generados. Condenó a Colpensiones a reactivar la afiliación de la señora Lovera Barrios, sin solución de continuidad y a que una vez recibidos los recursos provenientes de Porvenir S.A actualice la historia laboral de la actora con todos sus aportes realizados al RAIS. Finalmente, condenó en costas a Porvenir S.A y en favor de la demandante, fijando como agencias en derecho la suma de 1 salario mínimo legal mensual vigente al momento de su liquidación.

La juez de primera instancia advirtió el precedente judicial vigente en la materia y señaló que a Porvenir S.A le correspondía demostrar el cumplimiento de su deber de información antes de la suscripción del formulario de afiliación, carga probatoria que no satisfizo con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, declarando en consecuencia la ineficacia de traslado de régimen pensional.

### **Recursos de apelación**

**Porvenir S.A:** Inconforme con la decisión proferida por la juez de instancia, solicitó revocar en su totalidad la misma, argumentando que cumplió con el deber de información en los términos que se exigían para la época del traslado, es decir, conforme al artículo 97 del Decreto 663 de 1993, no siéndole exigible cumplir con este deber de acuerdo a las disposiciones del Decreto 2241 de 2010, toda vez que esta norma no se encontraba vigente para el momento del traslado. Por otra parte, del interrogatorio rendido por la demandante se advierte que Porvenir S.A le informó a ésta de la existencia de rendimientos financieros, de pensión anticipada y de otras características del RAIS,

---

<sup>5</sup> 01PrimeraInstancia; 05. Acta (complete) 2018-44 vs Colpensiones y Porvenir.pdf.

además de que la actora confesó que su motivación para retornar a Colpensiones estaba fundamentada en un interés netamente económico respecto al monto de su mesada pensional. Debe entenderse entonces que el acto de traslado de régimen es válido, puesto que cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad vigente y no pesa sobre él ningún vicio que lo invalide.

Solicitó que, si en gracia de discusión se llegase a confirmar la declaratoria de ineficacia del traslado, se revoque la condena a trasladar a Colpensiones los gastos de administración y demás emolumentos ordenados por la a quo, teniendo en cuenta que Porvenir S.A hizo una adecuada gestión fiduciaria de los recursos de la demandante, lo cual se evidencia en los rendimientos financieros obtenidos por ésta y en el hecho de que contó con una cobertura para los riesgos de invalidez y muerte a lo largo de su afiliación al RAIS.

**Colpensiones:** Solicitó modificar la sentencia de instancia en el sentido de ordenar a Porvenir S.A a que traslade a Colpensiones de manera indexada los aportes, rendimientos, cuotas de administración, aportes al Fondo de Pensión de Garantía de Pensión Mínima y las cuotas de seguros previsionales. Ello en atención a que la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y la Corte Constitucional han señalado que en casos como el presente la AFP del RAIS debe retornar la totalidad de las cotizaciones, incluso con cargo a sus propios recursos; Lo anterior en atención al artículo 48 de la Constitución política de Colombia relativo a la sostenibilidad financiera del sistema.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Otorgado el término para alegar de conclusión en esta sede, Colpensiones y Porvenir S.A lo recorrieron, mientras que la parte demandante se abstuvo de pronunciarse.

La apoderada de **Colpensiones**<sup>6</sup> solicitó revocar el fallo proferido en primera instancia, alegando que la señora Lovera Barrios firmó el formulario de afiliación a la AFP Porvenir S.A de manera libre, voluntaria y sin existir coacción alguna, siendo además una persona capaz en los términos del Código Civil, formulario que para la fecha del traslado era el único documento exigible y que por lo tanto no puede calificarse hoy de ilícito. De ahí que no resulte admisible la imposición de una carga procesal adicional a los fondos privados respecto al esclarecimiento de los hechos, pues esta imposibilidad probatoria en últimas termina descapitalizando el Régimen de Prima Media y afectando el principio de sostenibilidad financiera del sistema, con lo cual se pone en peligro el derecho a la seguridad social de los demás afiliados al RPM.

No obstante, solicitó que, si se llegare a confirmar la declaratoria de ineficacia del traslado, Porvenir S.A devuelva a Colpensiones la totalidad de valores cotizados por la actora al RAIS, tales como cotizaciones, intereses y rendimientos financieros, cuotas de administración, el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, seguros previsionales, y que ello se retorne de manera indexada, realizando además un cálculo actuarial al respecto. Por último, solicitó que se confirme la absolución en costas procesales a Colpensiones, en atención a que no intervino en forma alguna en la decisión

---

<sup>6</sup> 04MemorialAlegatos.pdf, contenido en la carpeta 02SegundaInstancia.

de trasladarse de la actora, siendo en consecuencia un tercero ajeno a este negocio jurídico.

Por su parte, la apoderada de **Porvenir S.A.**<sup>7</sup> manifestó que no existen razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado, pues la afiliación fue espontánea, sin presiones, cumpliendo los requisitos exigidos en la ley, además de que la AFP cumplió con el deber de información exigible para el momento de realizar el traslado establecido en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, de manera que la prueba documental que extraña la juez A Quo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado, pues ésta solo surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y en virtud de ello, no es cierto que la entidad esté en mejor posición probatoria.

Solicitó que, en caso de confirmarse la sentencia, no se ordene a Porvenir S.A. trasladar los dineros descontados por gastos de administración, por tener un mandato legal y destinación específica, descuentos que han cumplido con su cometido y ya no se encuentran en el patrimonio de la AFP, pues se usaron para generar los altos rendimientos de los que hoy goza la demandante y para cubrir los riesgos de invalidez y muerte, siendo imposible retrotraerlos, y su devolución implicaría un enriquecimiento sin justa causa debido a la inaplicación de normas legales que regulan las restituciones mutuas, resaltando además que toda decisión judicial de traslado de régimen pensional, debe tener como objetivo la estabilidad y sostenibilidad financiera del sistema, para lo cual trae a colación la sentencia de unificación emitida el 14 de agosto de 2019 por el Tribunal Superior de Medellín dentro del proceso con radicado 05001310500720150129501 así como el concepto emitido el 17 de enero de 2020 por la Superintendencia Financiera de Colombia.

## II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones.

### Hechos relevantes probados documentalmente

---

<sup>7</sup> 05MemorialAlegatos.pdf, contenido en la carpeta 02SegundaInstancia.

Luz Bety Lovera Barrios nació el 12 de agosto de 1961<sup>8</sup>. Inició cotizaciones ante el extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS- el 2 de febrero de 1983<sup>9</sup> y posteriormente suscribió formulario de afiliación a Porvenir S.A el día 10 de agosto de 1999<sup>10</sup>. Al 6 de julio de 2017 contaba con 1493 semanas cotizadas en toda su vida laboral<sup>11</sup>. En el mes de julio de 2017 solicitó a Porvenir S.A la invalidación de su afiliación al RAIS<sup>12</sup>, pero este fondo privado rechazó su petición el 28 de julio de 2017 bajo el argumento de que su decisión de trasladarse a esta AFP había sido libre y voluntaria<sup>13</sup>. El 18 de julio de 2017 suscribió formulario de afiliación con destino a Colpensiones<sup>14</sup>, sin embargo, en la misma fecha la administradora del RPM negó su solicitud por encontrarse a menos de diez años de cumplir la edad de pensión<sup>15</sup>.

#### **a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS.**

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte de la demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

i) Los artículos 48, 53, 335<sup>16</sup> y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1<sup>17</sup>, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994<sup>18</sup>; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas<sup>19</sup> para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994<sup>20</sup>.

---

<sup>8</sup> 01PrimerInstancia; 03. Expediente ordinario laboral 05001310501020180004401.pdf, pág 23. No se aportó registro civil de nacimiento de la demandante, pero sí copia de su cédula de ciudadanía que informa de dicha fecha, la cual no fue discutida por la pasiva dentro del proceso.

<sup>9</sup> 01PrimerInstancia; 03. Expediente ordinario laboral 05001310501020180004401.pdf, págs 41, 46, 162 y 169.

<sup>10</sup> 01PrimerInstancia; 03. Expediente ordinario laboral 05001310501020180004401.pdf, pág 45.

<sup>11</sup> 01PrimerInstancia; 02. Expediente completo 05001-31-05-010-2019-00540-00.pdf, pág 166.

<sup>12</sup> 01PrimerInstancia; 02. Expediente completo 05001-31-05-010-2019-00540-00.pdf, págs 54/56.

<sup>13</sup> 01PrimerInstancia; 02. Expediente completo 05001-31-05-010-2019-00540-00.pdf, págs 59/62.

<sup>14</sup> 01PrimerInstancia; 02. Expediente completo 05001-31-05-010-2019-00540-00.pdf, pág 57.

<sup>15</sup> 01PrimerInstancia; 02. Expediente completo 05001-31-05-010-2019-00540-00.pdf, pág 58.

<sup>16</sup> Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, en razón de la función que desempeñan.

<sup>17</sup> Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

<sup>18</sup> Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

<sup>19</sup> **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

<sup>20</sup> Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP,

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de *“suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen”*. No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, sólo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren

---

respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.



a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliada, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “*dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.*”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre e informada manifestación de voluntad de la afiliada al momento del traslado, o que debe desatenderse la línea jurisprudencial en materia de carga probatoria en asuntos como el que nos ocupa, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que estuviese precedido de la satisfacción o del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó a la afiliada, quien, según sus dichos al absolver el interrogatorio de parte, escuchó del asesor que tendría mejores garantías de pensión en dicho fondo.

Tampoco son admisibles los argumentos de que el traslado obedeció a una decisión espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley; se satisfizo el deber de información en los términos exigidos para entonces; situación que tampoco acreditó, limitándose a afirmar que así había ocurrido. Con independencia de que la afiliación se diera con antelación o en momento posterior a la regulación de deberes del consumidor financiero, las AFP deben, en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones del traslado, como sostuvo la referida Corte en **sentencia SL 4360 de 2019** Radicado 68852.

En cuanto a la inconformidad sobre la **carga de la prueba**, con dicho precedente, se desvirtúa además la aplicación al actor del principio de autoresponsabilidad de los hechos afirmados en la demanda, pues en este caso, en virtud de la carga dinámica de la prueba ésta se radica en cabeza de las AFP quienes a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen de la asegurada, tal y como dilucida la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la

documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todos los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sub-lite, mediante la prueba documental se evidencia que Luz Bety Lovera Barrios nació el 12 de agosto de 1961<sup>21</sup>, por lo que, al 1 de abril de 1994, cuando entró en vigencia el SGSSP para ella, por ser trabajadora del sector privado<sup>22</sup>, contaba con 32 años de edad y no tenía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, por tanto, no fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Suscribió formulario de afiliación a Porvenir S.A el día 10 de agosto de 1999<sup>23</sup>, el cual acusa de ineficaz. En el mes de julio de 2017 solicitó a Porvenir S.A la invalidación de su afiliación al RAIS<sup>24</sup>, pero este fondo privado rechazó su petición el 28 de julio de 2017 argumentando que su decisión de trasladarse a esta AFP había sido libre y voluntaria<sup>25</sup>. El 18 de julio de 2017 suscribió formulario de afiliación con destino a Colpensiones<sup>26</sup>, sin embargo, en la misma fecha la administradora del RPM negó su solicitud por encontrarse a menos de diez años de cumplir la edad de pensión<sup>27</sup>.

En el sub judice, fue recaudado interrogatorio a la demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su traslado hacia el RAIS, manifestó que cuando se encontraba laborando al servicio del Colegio Mayor de los Andes, en la ciudad de Caquetá, llegaron unos funcionarios de Porvenir S.A y realizaron una reunión grupal en la cual expresaron a los docentes que el ISS se iba a acabar y que muy seguramente se iban a perder sus aportes, y que aún si el Seguro Social no desaparecía no iban a poder acceder a la mesada pensional que ellos esperaban. Así mismo, declaró que en esa asesoría no les hablaron de heredabilidad de sus aportes, de las modalidades de pensión, de bono pensional, de garantía de pensión mínima, que su mesada dependería del capital que tuviera ahorrado, que se podría trasladar de régimen hasta antes de cumplir 47 años de edad, ni que su grupo familiar y el movimiento del mercado bursátil afectarían el monto de su pensión en el RAIS.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que, esta sala no acoja el supuesto de que los actos de la demandante posteriores al traslado, como su prolongado

---

<sup>21</sup> 01PrimerInstancia; 03. Expediente ordinario laboral 05001310501020180004401.pdf, pág 23.

<sup>22</sup> 01PrimerInstancia; 03. Expediente ordinario laboral 05001310501020180004401.pdf, págs 41, 46, 162 y 170. Para la entrada en vigencia del SGSSP se encontraba laborando al servicio del empleador Correales Jimenez Jaime.

<sup>23</sup> 01PrimerInstancia; 03. Expediente ordinario laboral 05001310501020180004401.pdf, pág 45.

<sup>24</sup> 01PrimerInstancia; 02. Expediente completo 05001-31-05-010-2019-00540-00.pdf, págs 54/56.

<sup>25</sup> 01PrimerInstancia; 02. Expediente completo 05001-31-05-010-2019-00540-00.pdf, págs 59/62.

<sup>26</sup> 01PrimerInstancia; 02. Expediente completo 05001-31-05-010-2019-00540-00.pdf, pág 57.

<sup>27</sup> 01PrimerInstancia; 02. Expediente completo 05001-31-05-010-2019-00540-00.pdf, pág 58.

silencio, o el sufragar aportes, fueren indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que la afiliada pudiese realizar**, pues la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199-2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**<sup>28</sup>, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

En este caso, la pasiva no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en la posible afiliada, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De ello no hay elementos de convicción en el plenario distintos del formulario de afiliación en ésta, sobre el cual la AFP Porvenir S.A adujo que, estando suscrito por la demandante, quien lo hizo de manera libre y voluntaria, no habiéndose tachado su firma, y que, por contener las declaraciones que le exige el artículo 114 de la ley 100 de 1993, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación de justicia definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple

---

<sup>28</sup> Por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral.

suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Porvenir S.A, vulneradoras de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993 26 genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como respuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en sentencia SL-4360 de 2019, concluyendo en que: “la sanción impuesta en el artículo 271 27 de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”, lo cual, da lugar a garantizar el derecho de la accionante a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES y a declarar que ha permanecido afiliada, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación.

#### **b) Consecuencias de la declaratoria de ineficacia**

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del Régimen de Prima Media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la

afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él.

En consecuencia, se ordenará a **Porvenir S.A** que, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, traslade a COLPENSIONES la **totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que la señora Lovera Barrios figuró como afiliada al RAIS.

Se precisa que **Porvenir S.A también debe trasladar a Colpensiones, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras**, por ella descontadas durante el periodo de afiliación de la hoy demandante, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni si el dinero de la afiliada fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, y por no haberse estudiado previamente a la afiliación de la situación particular de la hoy demandante, e ignorándose verdaderamente cuáles fueron los argumentos esgrimidos por dicha AFP para aseverar que cumplió con los deberes de información que sostiene haberle dado, no es pertinente exonerarla de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero de la afiliada, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y la demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración de la accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuencialmente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor de la hoy demandante, como anteriormente se explicó.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante las órdenes impartidas en la primera instancia que aquí se confirma.

Pero, retomando el punto, y por las mismas razones expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral<sup>29</sup> contenido en sentencias **SL**

---

<sup>29</sup> Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Porvenir S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados al demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes

**3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por la AFP del RAIS durante el periodo de afiliación del hoy demandante en ella, se deben trasladar debidamente **indexadas** y con cargo a sus propios recursos, aspecto en el cual, se adicionará la decisión de instancia, con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Por lo expuesto, no se acogerá lo expuesto por Porvenir S.A en sus alegatos en esta sede, respecto al **Concepto del 17 de enero de 2020 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia**, a la luz del artículo 28 del CPACA<sup>30</sup>, ante consulta realizada por la Vicepresidente Jurídica de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías -ASOFONDOS-, interpretando que para determinar los recursos a trasladar con motivo de la declaratoria judicial de nulidad o ineficacia de traslado de régimen debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 3995 de 2008<sup>31</sup>, toda vez que dicha norma fue expedida para efectos de traslado en asuntos referentes a multiafiliación, situación que no corresponde a la aquí ventilada y adicionalmente, tal concepto no obliga, pues se encuentra decantado por el órgano de cierre judicial en materia laboral y de seguridad social que los gastos administración y prima de seguro previsional deben retornar a Colpensiones como consecuencia de la ineficacia declarada.

De otro lado, tampoco se acogerá la solicitud de Colpensiones presentada en sus alegatos en esta sede, respecto a que se le autorice a realizar un cálculo actuarial de los valores que se ordena devolver a Porvenir S.A, pues se precisa su extemporaneidad, y no se accederá a ésta petición por no haberse solicitado en el escrito de contestación de demanda, y adicionalmente, la AFP del RAIS aún no ha devuelto a Colpensiones dichos conceptos, deviniendo impertinente realizar un estudio del valor actualizado del dinero sobre valores que aún se desconocen.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PORVENIR S.A, sin trasladar consecuencias negativas a la actora.

---

para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

<sup>30</sup> “**ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.”

<sup>31</sup> **Decreto 3395 de 2008 ARTÍCULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN.** <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre de 2007, se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas normas de traslados de afiliados, recursos e información.

A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7o, 8o y 12 del presente decreto

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el Régimen de Prima Media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

Así las cosas, se **confirmará, modificará y adicionará** la sentencia conocida en apelación.

### III. EXCEPCIONES

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

### IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A por haber resultado vencida en su recurso. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para 2022 (1 SMLMV) y en favor de la demandante. Se exonera de este concepto a Colpensiones por haber prosperado su recurso de apelación.

### V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el 16 de junio de 2021, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por la señora LUZ BETY LOVERA BARRIOS contra COLPENSIONES y PORVENIR S.A, **modificándola y adicionándola**, en el sentido en que esta última:

Trasladará con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la totalidad de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que la demandante ha figurado como afiliada a dicho régimen.

Además, PORVENIR S.A trasladará a Colpensiones los valores descontados a la actora por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima, y con cargo a sus propios recursos, trasladará debidamente indexados a Colpensiones el valor de comisiones de administración y primas de seguros descontados en el mismo lapso que permaneció como afiliada ante ella.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PORVENIR S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, e incorporar los respectivos aportes pensionales completos en la historia laboral de la demandante como si hubiera permanecido en el RPM.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A por haber resultado vencida en su recurso. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente en 2022 (1 SMLMV) y en favor de la demandante.

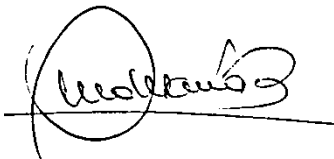
Notifíquese lo decidido por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN